

Fomento Fabril, el mismo 16 de agosto, escribió una airada carta al presidente del Eximbank, en la cual le explicaba que «Chile vive un proceso de profundas transformaciones económico-sociales que afectan radicalmente su estructura económica y, en consecuencia, la situación de sus empresarios. Frente a él, nuestra institución gremial— la más antigua de las Américas— se encuentra empeñada en MINIMIZAR EL COSTO ECONÓMICO DE LAS TRANSFORMACIONES QUE SE VIVEN y en garantizar plenamente que él se desenvuelva en un marco de libertad y democracia y con pleno respeto a las garantías fundamentales». Por eso, frente a la negativa de préstamos por parte del Eximbank, «como empresarios privados y sobre todo por respeto a nuestra noble tradición democrática, no podemos aceptar que se subordinen resoluciones de esta índole, condicionándolas a decisiones que pueda adoptar nuestro Gobierno dentro del régimen jurídico que democráticamente se ha dado al país». Seguidamente, la Sociedad de Fomento Fabril le pide al Eximbank que revoque la postergación del préstamo a LAN-Chile.

Fuerza y debilidad

Cuando el Pentágono decidió en octubre de 1970 dar luz verde a la «experiencia de Allende» para «esperar y ver» si se le podía manejar como «bombero del incendio popular», los generales «reformistas» estuvieron de acuerdo y, en consultas con los sectores industriales y comerciales chilenos, estimaron que, si no se asfixiaba desde el exterior el experimento, «este puede resultar» y «la reforma de las estructuras hacia un capitalismo de Estado más sólido» puede «calmar la insurrección popular».

El Gobierno de Allende había iniciado una política de «reactivación económica» para 1971, que se basaba fundamentalmente en la utilización de toda la capacidad productiva y en el aumento de la demanda interna por medio de sustanciales reajustes de sueldos y salarios bajos, con un control de precios que, en una estructura monopólica como la chilena, afectaba en realidad menos a la oligarquía que a las empresas medianas y pequeñas. Esta reactivación económica hizo que en 1971, los índices de crecimiento económico del país llegaran a 8,3 %, lo cual constituía un récord. Pero, ese era el tope de la reactivación. Si en ese momento no había acumulación de capital, el sistema se

desmoronaría y, al desmoronarse, la enorme presión popular podría desbordarse más allá de los límites «razonables» establecidos por los dueños de Chile.

Por otra parte, la presión de los generales «reformistas» sobre Allende había logrado que la viga maestra del programa de la Unidad Popular (el traspaso de todos los monopolios en manos privadas chilenas o extranjeras) se redujera a una expresión mínima. En efecto, para realmente expropiar los monopolios, se necesitaba traspasar al Estado, de un total de poco más de 35.000 establecimientos industriales y de distribución en todo el país, una cantidad un poco superior a 266 empresas de carácter monopólico. Allende prometió traspasar sólo 90 de ellas, dejando así en manos de la oligarquía y de los norteamericanos más del 50 % del capital monopólico. Más todavía: de esas 90 empresas monopólicas, sólo 53 iban a pasar a ser de dominio total del Estado, mientras las 37 restantes quedarían en la llamada «área mixta», en sociedad con esos mismos capitales monopólicos en manos privadas yanquis y chilenas.

Además, Allende había accedido a expropiar dentro de la «Constitución y las leyes» con lo cual el costo de la formación del área de propiedad social era gigantesco, traspasando a manos de los «expropiados» enormes cantidades de capital que les permitía seguir manteniendo un sustancial poder económico y de maniobra. Ya para agosto de 1971, las cifras eran elocuentes: un total comprometido de 10.946 millones de escudos (890 millones de dólares) para ese año. El detalle era el siguiente:

Compra de acciones de bancos comerciales . . .	400 millones
Pago al contado por la expropiación de latifundios.	320 millones
Compra de empresas industriales monopólicas . .	600 millones
Compra de tres bancos extranjeros	120 millones
Hierro, salitre y consorcios industriales yanquis .	576 millones
Indemniz. «indirecta» a Anaconda y Kennecott .	8.830 millones

Por supuesto, todo esto provocaba una debilidad potencial en el plan económico del Gobierno que, en agosto de 1971, tenía confiados a los oligarcas chilenos en poder manejar «la situación» y mantener a Allende dentro del «cambio reformista» para «evitar la revolución». Pero, para conseguir que este esquema caminara, era importante que Estados Unidos no apareciera como lo que realmente era: el enemigo principal del pueblo chileno. Era importante que no se asfixiara la economía

